

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA COMUNICADO MAESTRÍA EN HISTORIA

Los integrantes del Comité Curricular de la **Maestría en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira** consideramos que estamos viviendo en la actualidad uno de los momentos más significativos y, a la vez, más complejos, en los procesos de fortalecimiento de la democracia participativa que Colombia ha tenido en los últimos años. “El derecho a la calle”, es decir, el derecho a la movilización y la protesta, es una forma de expresión política legítima a partir de la cual se busca ampliar los estrechos márgenes de la democracia formal y representativa en nuestro país. Así lo expresa la Constitución de 1991 y otra serie de normativas que, tras largos años de luchas sociales, de estigmatización y de criminalización de la protesta por parte de las autoridades del estado colombiano, han permitido que amplios sectores de la sociedad colombiana asuman este derecho colectivo como elemento sustancial del control y confrontación de los abusos de los poderes políticos y de las fuerzas armadas.

En los procesos más recientes de democratización de la sociedad colombiana, las marchas de los últimos años, y en especial, las que hemos vivido en estos últimos días, muestran de manera fehaciente la formación de una conciencia ciudadana crítica que en las distintas regiones del país exige cambios sustanciales en la manera de hacer y determinar los rumbos de la política en nuestro país. Este descontento creciente con el gobierno actual también ha permitido cuestionar -en muchos casos- las estructuras y las relaciones de poder a nivel local y regional. La voz del “demos” colombiano ha resonado de manera clara y contundente en las calles y en las redes sociales. Y por eso mismo, se puede decir que toda esta movilización ha derivado en una especie de “virtud democrática activa”, constituyéndose en guardiana directa de los derechos del pueblo colombiano.

Es claro que el paro que inició con un objetivo fijo, desnudó la crisis social de algunos sectores y ciudades. En esta coyuntura excepcional de la historia reciente de Colombia, hemos vivido momentos de profunda emoción por ese despertar de la sociedad colombiana que le ha pasado cuenta de cobro a ciertos sectores de la clase política colombiana, que han basado su dominio en el engaño, el miedo y la polarización. Pero también hemos sentido momentos de profundo dolor, consternación e impotencia al ver los abusos de las fuerzas policivas sobre la ciudadanía que protesta en las calles, muchas veces con la connivencia de las autoridades civiles al frente de algunas alcaldías en las principales ciudades del país. Al fragor de estas situaciones, irrumpen diversas formas de desmanes y vandalismo que habría que entenderlas en su debido contexto, como una reacción a esa violencia estructural que hace de la sociedad colombiana una de las más desiguales e inequitativa de América Latina. Es evidente que el país está siendo protagonista y testigo al mismo tiempo del desmoronamiento de la hegemonía política del uribismo, así como del modelo económico inequitativo neoliberal, que en su afán de desgravar al gran capital y los grandes empresarios, terminó desfinanciando al estado, en detrimento de las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad colombiana, tanto en los sectores urbanos como rurales.

En este sentido, expresamos nuestro apoyo a las personas que en distintas ciudades del país vienen ejerciendo su legítimo derecho a la protesta y la movilización social. De igual modo, expresamos nuestro rechazo e indignación ante el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de la policía nacional para reprimir las protestas de los últimos días, cargadas de odio y brutalidad. Aquí no hay lugar a eufemismos. Es inaceptable, inadmisible e injustificable, observar la forma como los agentes de la policía y del ESMAD le han declarado la guerra a la sociedad -y en especial, a los jóvenes- que salen a expresar su inconformismo político, en una clara violación a los Derechos Humanos de estas personas. En las imágenes que hemos observado en algunos medios de comunicación, así como en las redes sociales, pareciera como que

estuvieran persiguiendo al más sanguinario de los bandoleros de la época de La Violencia o como si quisieran dar cacería al capo Pablo Escobar entre los tejados y balcones de las casas de la gente que mira estupefacta estos lamentables hechos. De este modo, las Fuerzas Armadas de Colombia han aumentado su desaprobación ante muchos sectores de la población civil, con lo que se agudiza la crisis de gobernabilidad y de la institucionalidad de nuestro país.

En medio de esta preocupante crisis humanitaria y de violación de los derechos humanos, hacemos un llamado al gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, y al alcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya López, para que públicamente enmienden el error de haber convocado a las autoridades de policía y a las empresas de seguridad privada, con el fin de crear un “frente de acción común”, que se asemeja a la figura de las CONVIVIR y las organizaciones de limpieza social que años atrás y de manera impune, cegaron la vida de muchas personas que las clases dominantes de la ciudad consideraban como “ciudadanos estorbo”, indeseables e impertinentes por atreverse a pensar de manera diferente, crítica y controversial. Igualmente, consideramos inconveniente la militarización de las ciudades y las medidas de toque de queda continuo que restringen las posibilidades de movilidad, de reunión y de expresión de inconformismo político de la población colombiana.

Esta situación –inédita, por lo demás, en la historia reciente de Colombia- debe canalizarse a través de un gran diálogo nacional abierto e incluyente de la ciudadanía, de sus organizaciones políticas y sociales, que permita también recoger el sentir y los anhelos postergados de las personas en las comunidades rurales y barriales de todo el país. Rechazamos esa especie de “doctrina de miedo”, que es la manera como los medios y algunos políticos reaccionarios de la derecha colombiana están generando una especie de miedo al poner a circular mensajes sobre desabastecimiento de alimentos, escasez de gasolina, toma de las ciudades por supuestos guerrilleros, etc., un cúmulo de rumores y noticias falsas, que están sirviendo exclusivamente como medida de represión anticipada y para desincentivar la movilización.

Consideramos que la universidad, en cuanto recinto de la reflexión, no debe ser ajena a este momento donde una desigualdad de “larga duración” se ha evidenciado y desbordado en las calles de todo el país. Como cultores de la historia nos unimos a la declaratoria de paro nacional, a la asamblea permanente de los profesores de la UTP; apoyamos a los estudiantes de nuestra universidad y de las demás universidades de la ciudad y el país, que han estado participando en las marchas ciudadanas de los últimos días, y a los demás sectores de la sociedad colombiana que al unísono expresan su disgusto por el sonsonete autoritario e intimidatorio de ciertos sectores de la derecha colombiana y que exigen cambios inmediatos y sustanciales en la política y en el manejo del Estado colombiano, en consonancia con la defensa del Estado de Derecho y al mismo tiempo, del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución Política de 1991. Invitamos de igual modo a que las directivas de la Universidad se sumen a este clamor ciudadano, que sin duda, también está en consonancia con el proyecto educativo institucional, en lo que toca con la formación integral y el pensamiento crítico.

Atentamente y solidariamente,

Dr. Jhon Jaime Correa Ramírez (Director)

Dr. Alberto Antonio Berón Ospina

Dr. Sebastián Martínez Botero

Mg. Carlos Alfonso Victoria Mena

Mg. Alonso Molina Corrales

Mg. [y candidato a doctora] Johana Guarín Medina

Historiador [y candidato a Mg.] Caín Contreras Valdés

Pereira (Colombia), 5 de mayo de 2021



Maestría
en Historia
Acreditada en Alta Calidad